

SECRETARIA.

NEGOCIADO 2º

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 467, y con fecha 26 del mes próximo pasado, se comunica á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Pasado á informe de la Sección de Ultramar del Consejo de Estado el expediente promovido por Don Mauricio Lopez Arias, Secretario destituido del Ayuntamiento de Salinas, alzándose de la providencia por la que se le destituyó de su cargo, con fecha 30 de Julio último, lo evacua en la forma siguiente.—

“Excmo. Sr.:—Con Real orden de 4 de Junio último comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., se remitió á informe de la Sección el expediente promovido por Don Mauricio Lopez Arias, Secretario destituido del Ayuntamiento de Salinas, en Puerto-Rico, alzándose de la provincia del Gobernador General de la Isla, por la que se le destituyó de su cargo.—El interesado solicita que se le reponga en el mismo cargo, añadiendo que no fué oído al decretarse su separación, debido á excitación del Alcalde Don Anecto Caballero y Balbás. Explica su destitución por haber firmado como Secretario unas certificaciones que le mandó extender el primer Teniente de Alcalde Don Joaquín Lebron Vega, y haberse negado á dar cuenta al citado Caballero de dichas certificaciones, por su carácter de reservadas.—El Alcalde había acordado la suspensión del Secretario en uso de las facultades que le confiere el artículo 120 de la Ley municipal de 24 de Mayo de 1878, estimándole comprendido en el caso 7º del artículo 119 que trata de los que son deudores á los fondos municipales, como segundos contribuyentes, y además por no merecer en ningún concepto la confianza de la Alcaldía. El Ayuntamiento acordó la separación de Lopez Arias, y el Gobernador General aprobó ambos acuerdos.—Por una certificación del Ayuntamiento de Patillas, su fecha 4 de Enero de 1881, se prueba que Lopez Arias, Depositario que fué de los fondos municipales, es en deber á los mismos 1,299 escudos, 190 milésimas, importe que recibió de la Junta municipal en Abril de 1865, cuya recaudación no comprobó, ni tampoco su entrega al cesar en la Depositaria en 12 de Enero de 1870; que esta suma aun no la ha hecho efectiva, pues en 20 de Agosto de 1881 el Ayuntamiento de Patillas reclamó del de Salinas retuviere á Lopez Arias la cuarta parte del sueldo que como Secretario disfrutaba.—El Negociado correspondiente de ese Ministerio opinó que la incapacidad que establece el caso 7º del artículo 119 de la Ley municipal no debe entenderse de un modo absoluto en cuanto á los que son deudores como segundos contribuyentes á los fondos municipales en general, si no que debe limitarse su aplicación á los que lo sean á los fondos de los pueblos en que hayan de ejercer sus cargos. El interesado no era deudor á los de Salinas sino á los de Patillas, como se demuestra con la mencionada certificación de manera que, desvanecida esta razón, viene á quedar como única del acuerdo apelado la de que no merecía el Secretario la confianza del Alcalde, motivo que no se menciona en la providencia del Gobernador General, si bien debe suponerse que se tuvo en cuenta para dictarla.—La Sub-secretaría está conforme con el parecer del Negociado.—La Sección se ha hecho cargo de este expediente, consultando al mismo tiempo la Ley municipal de Puerto-Rico, en sus artículos 119 y 120. El interesado Don Mauricio Lopez Arias, resulta deudor á los fondos municipales de Patillas en la indicada Isla, y destinado por el Alcalde de Salinas, fundándose en esta circunstancia prevista en el caso 7º del artículo 119, que dice: “no pueden ser Secretarios en propiedad, los deudores á fondos municipales como segundos contribuyentes.” El Alcalde se fundó además para suspender á Lopez Arias del cargo que ejercía en Salinas en que no le inspiraba confianza por ningún concepto, pero el presente dictamen prescindirá de esta declaración, por que estando sujeta al criterio personal, no lo está á las prescripciones de la Ley, ni puede juzgarse por falta de datos suficientes. Esto supuesto tratará únicamente del punto principal, esto es, de si el citado caso 7º del artículo 119 debe entenderse en toda generalidad de los deudores á los fondos municipales de cualquier pueblo, ó solo de los que lo sean al Municipio en el que ejerzan sus funciones. Sin embargo, no dejará de observar la Sección que la razón presentada como descargo de su conducta por Lopez Arias es una infracción de la Ley por que tenía el deber de dar cuenta al Alcalde de las certificaciones que el Teniente de Alcalde le había mandado extender. No puede entenderse bien el artículo de la Ley si se considera aislado de su conjunto, por lo mismo que el espíritu de unas prescripciones no ha de ser opuesto al que inspira las otras, conviene recordar las análogas para su mejor inteligencia. De las prohibiciones del artículo 119, como de las análogas del 123 de la Ley que rigen en la Península, ó mejor dicho de las incapacidades marcadas para ejercer el cargo de Secretario municipal, hay unas que se refieren al mismo Ayuntamiento en que se ejerce y otras que son generales; pertenecen al primer grupo la de los Concejales del Municipio, la de los particulares que tengan contratos ó compromisos con él ó con el común de vecinos y los que tengan pendiente cuestión judicial; pero en el segundo grupo entra evidentemente la incapacidad señalada con el número 3º que comprende á los empleados activos de todas clases. Cuando la Ley quiso limitar la incapacidad al Ayuntamiento mismo en que se ejerce el cargo, tuvo cuidado de indicarlo, cuan-

do por el contrario empleó una fórmula general, dió siempre á entender que la prohibición era general y se refería á todos los Ayuntamientos. Así al declarar incapaces á los deudores á fondos municipales, dictó una regla general, en la que se ha declarado comprendido al reclamante Secretario del Municipio de Salinas. Esta interpretación adquiere mayor fuerza si se compara con la análoga prohibición para ser Concejales impuesta á los deudores como segundos contribuyentes á los fondos municipales, provinciales ó generales contra quienes se haya expedido apremio. El hecho se encuentra tan probado como el derecho en esta cuestión por la certificación del Ayuntamiento de Patillas, al que Lopez Arias es en deber la suma de 1,299 escudos 190 milésimas, por tanto, habiéndose observado en la tramitación del expediente las formalidades consignadas en el artículo 120 de la Ley municipal de 24 de Mayo de 1878. La Sección es de parecer que procede desestimar la solicitud del interesado.—V. E. sin embargo, con S. M. resolverá lo que crea mas acertado.—Y habiéndose conformado S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.”

Y puesto el cumplimiento por S. E. con fecha 25 del actual, de su Superior orden se publica en la GACETA para general conocimiento.

Puerto-Rico, 31 de Agosto de 1882.—El Secretario del Gobierno General, *Ricardo de Cubells*. [3622]

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS.  
MINAS.

Vista la nueva instancia de Don Manuel Ugalde solicitando la demarcación del registro minero titulado la *Esperanza*, del término de Naguabo; Resultando que dicha operación no ha podido llevarse á cabo hasta ultimar las informaciones conducentes al esclarecimiento de la verdad en lo que se refiere á la caducidad de la concesión denominada *Santa Teresa*, que comprende los mismos terrenos que en aquel se solicitan; Resultando que en el número 102 de la GACETA OFICIAL de esta Isla correspondiente al día 26 del mes próximo pasado, aparece el anuncio de la Colecturía de Rentas y Aduana de Naguabo, relativo á la subasta pública que ha de celebrarse para el remate de unos pilotes de mineral de cobre, procedente en parte, de la mina *Santa Teresa*, para satisfacer el importe del descubrimiento, que, por canon superficial corresponde al Tesoro, con arreglo al artículo 75 del Real Decreto de minería vigente; Resultando que ha trascurrido con exceso el plazo fijado por el artículo 77 del Reglamento para responder á la notificación, que, por este Gobierno se dirigiera al representante de la citada concesión en 7 de Febrero último, con el fin de que alegara lo que creyese conveniente á su derecho y en su vista, dictar resolución en el expediente de caducidad entablada por el Sr. Ugalde, todo lo cual indica con evidencia que el concesionario ha desistido de sus derechos: Visto el mismo artículo 77 del Reglamento que prefiere el plazo dentro del cual debe dictarse la resolución que proceda; el Excmo. Sr. Gobernador General por Decreto de 1º del actual, y de acuerdo con lo informado por la Inspección del ramo, se ha servido decretar la caducidad de la concesión minera titulada *Santa Teresa*, del término de Naguabo, como comprendida en una de los casos marcados en el artículo 65 del Real Decreto de minería, y que en su lugar prevalezca el registro la *Esperanza*, para el cual se solicita la demarcación.

Lo que de orden de S. E. se publica en este PERIÓDICO OFICIAL á los efectos reglamentarios.

Puerto-Rico, 2 de Setiembre de 1882.—El Secretario del Gobierno General, *Ricardo de Cubells*. [3663]

TERRENOS EN LAS PLAYAS.—PONCE.

*DON RICARDO DE CUBELLS*, Abogado, Jefe de Administración de 2ª clase y Secretario del Gobierno General de esta Isla.

Certifico: que Don Tomás Armstrong, vecino de Ponce, ha presentado en este Gobierno General una instancia en demanda de que se le concedan unos terrenos situados en la Zona marítima de aquella Ciudad, acompañando los documentos que se exigen por las disposiciones vigentes.

Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de aguas vigente en esta Isla; el Excmo. Sr. Gobernador General ha tenido á bien disponer se haga pública dicha petición por medio de este PERIÓDICO OFICIAL, como de su orden lo ejecuto, á fin de que los que se crean perjudicados presenten sus reclamaciones dentro del término de un mes, á contar desde esta fecha, en la Alcaldía de Ponce, en la cual se hallarán de manifiesto todos los documentos relativos al asunto.

Puerto-Rico, 29 de Agosto de 1882.—*Ricardo de Cubells*. [3451] 3—3

REAL AUDIENCIA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

En el expediente sobre cumplimiento del Real

Decreto de 21 de Julio de 1882 que dispone se publique y observe en esta Isla y la de Cuba la Ley de casacion y revision en lo civil con arreglo á las disposiciones vigentes en la Península, el Tribunal pleno de esta Real Audiencia ha acordado lo que sigue:

“Tribunal pleno de la Real Audiencia de Puerto-Rico, Agosto treinta de mil ochocientos ochenta y dos.—Guárdese y cúmplase lo dispuesto por S. M. el Rey (Q. D. G.) en el precedente Real Decreto, y al efecto dirijase comunicacion á la Sala de Justicia y librese orden general en tres números consecutivos de la GACETA OFICIAL á los Jueces de 1ª Instancia del territorio, significándoles que la Ley de casacion y revision en lo civil á que el citado Real Decreto se refiere se encuentra publicada en la número 101 de 24 de los corrientes y que se producen por consiguiente desde la fecha de su promulgacion los efectos que son legales.—Así lo acordaron y rubrican los Sres. expresados al margen, de que certifico.—(Hay cinco rúbricas.)—*Rafael Romeu*.—El Sr. Fiscal de S. M. queda enterado.—(Hay una rúbrica.)—Al margen.—Sres. Presidente, *Itmo. Sr. Martos*.—Presidente de Sala, *Sr. Armengol*.—Magistrados, *Sres. Moreno*.—*Zárate*.—*Comesaña*.—Fiscal de S. M. accidental, *Sr. M. San Julian*.”

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se publica en la GACETA OFICIAL para su mas exacta observancia.

Puerto-Rico, 30 de Agosto de 1882.—El Secretario de Gobierno, *Rafael Romeu*. [3633] 3—1

Intendencia general de Hacienda pública DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

CIRCULAR.

La nueva Instrucción para la administración del impuesto sobre cédulas personales, aprobada por Real Decreto de 6 de Mayo último, y que ha de regir en reemplazo de la provisional, se publicó por esta Intendencia en las GACETAS números 70, 71 y 73, de fechas 13, 15 y 20 de Junio.

En el número 88 de la propia GACETA, correspondiente al día 25 de Julio próximo pasado, publicó tambien esta Intendencia la Ley de presupuestos para esta provincia durante el actual año económico de 1882 á 83, y cuya Ley, al modificar por su artículo 6º parte del 19 de la Instrucción antes citada, lo hace en los términos siguientes:

“Se proveerán de cédulas de 5ª clase, valor de 1 peso, los que paguen anualmente por una ó varias cuotas de contribucion directa, desde 100 á 499 pesos; correspondiendo las de 6ª clase, valor de 40 centavos, á los que por igual concepto satisfagan menos de 100 pesos.”

“Los dedicados al servicio doméstico se proveerán de cédulas de 7ª clase, valor de 20 centavos; creándose una nueva clase, valor de 10 centavos, exclusivamente destinada á los jornaleros.”

Las disposiciones precedentemente insertas del artículo 6º referido, componen parte de la Instrucción de que se ha hecho mérito; por lo que, en la forma en que se han recibido con Real orden, número 509, de 4 del corriente mes, serán comprendidas en los ejemplares que de la misma Instrucción han de imprimirse; perteneciendo á la clase 8ª las cédulas de nueva creacion, destinadas á los jornaleros.

Dada la oportuna y conveniente publicidad, segun queda expuesto, á la Instrucción de que se trata, como á la Ley, de que queda hecha mención, es de creerse, que los Sres. Alcaldes se habrán enterado de ambas disposiciones para cumplir, como deben, la parte que de ellas les compete.

La Instrucción tantas veces citada contiene modificaciones de importancia respecto de la provisional, que son, á saber:

Es una de esas modificaciones la contenida en el párrafo 2º del artículo 1º, que determina los casos en que las mujeres casadas é hijos de familia, mayores de catorce años, que no tengan peculio propio, están obligados á proveerse de cédula personal, como tambien cuando deben obtenerla, las mujeres é hijos de los jornaleros.

Y es la otra modificación la introducida en el artículo 25, dispositiva de que para proveerse de cédulas, deben acudir los vecinos á la respectiva Alcaldía, pues la Instrucción provisional prevenia que se distribuyeran á domicilio.

Además, entre las modificaciones que, despues de aprobada la reciente Instrucción, se han introducido en ella por la Ley de presupuestos, como anteriormente aparece, una es la que ha creado la nueva clase de cédulas para los jornaleros al ínfimo valor de 10 centavos, mitad del que han venido satisfaciendo; á cuyo señalado beneficio de esperarse sabrán corresponder los interesados, proveyéndose en tiempo oportuno de aquel documento, sin dar lugar á que, para que lo obtengan, haya de emplearse el procedimiento de apremio.

Segun lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Instrucción, y á fin de que por los Sres. Alcaldes se cumpla lo que dispone el 22 en su primer extremo, tendrán estos muy presente que el impuesto en cuestion recae sobre tres principales bases: sobre la contribucion directa que se paga en una sola suma por territorial é industrial y de comercio, acumulándolas, con exclusion de los recargos; sobre el haber anual que se disfruta por uno ó varios conceptos, ya procedan del Estado, ya de la provincia, ya del Municipio, ya de empresas ó de